



COMUNICADO DE PRENSA

CODHAL DENUNCIA LA MILITARIZACIÓN Y EXCEPCIONALIDAD PERMANENTE DEL ESTADO DE DERECHO EN ECUADOR

Bruselas, 22 de mayo de 2025

El Consorcio de Organizaciones de Derechos Humanos de América Latina (CODHAL), conformado expresa su profunda preocupación ante el **Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno** presentado por la Presidencia de la República del Ecuador con calificación de urgencia económica.

Normalización de la Excepcionalidad y el Conflicto Armado Interno

Advertimos que esta iniciativa legislativa representa un giro institucional de consecuencias imprevisibles al pretender instaurar un régimen de excepcionalidad permanente, basado en una declaratoria unilateral de "conflicto armado interno". La utilización del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en lugar del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), sin las debidas garantías ni control jurisdiccional, configura una amenaza directa a la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia.

Concentración de Poder y Erosión del Principio de Legalidad

El proyecto otorga al Presidente de la República la facultad de reconocer, delimitar y gestionar un supuesto "conflicto armado interno" mediante Decreto Ejecutivo, sin controles judiciales efectivos. Este reconocimiento implica, de facto, la posibilidad de limitar derechos fundamentales, incautar bienes, expulsar extranjeros y aplicar el uso letal de la fuerza sin sujeción al principio de proporcionalidad del DIDH, bajo criterios exclusivamente administrativos y militares.

Expansión de la Militarización de la Seguridad y la Economía

Se consagra una arquitectura de seguridad dominada por un "Bloque de Seguridad" liderado por el Ejecutivo, que tiene potestades para definir zonas de seguridad, tomar control de sistemas de vigilancia y determinar medidas económicas. Esta configuración institucional refuerza el modelo de gobernanza por fuerzas armadas y debilita la institucionalidad civil, en abierta contradicción con los principios democráticos y de separación de poderes.

Vulneración de Principios Internacionales: No discriminación, Legalidad, Proporcionalidad y Garantías Judiciales

Aunque el proyecto menciona principios del DIH como distinción, proporcionalidad y humanidad, en la práctica despoja de contenido los principios rectores del DIDH al establecer presunciones de culpabilidad sobre bienes y personas, eliminar el rol del Poder Judicial en el control de medidas y permitir la incautación de bienes sin sentencia previa.

Criminalización Difusa y Estigmatización de Sectores Sociales

La inclusión amplia y ambigua de figuras como "autodefensas", "grupos armados organizados" o "vinculados a economías criminales" crea el riesgo de criminalización arbitraria de actores sociales, políticos, comunidades en resistencia o poblaciones vulnerables.

Contradicción con Obligaciones Internacionales del Ecuador

El proyecto se fundamenta en interpretaciones forzadas del DIH y desconoce el bloque de constitucionalidad que obliga al Ecuador a respetar los tratados internacionales de derechos humanos ratificados, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las medidas propuestas violan los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad, temporalidad y excepcionalidad exigidos para restringir derechos.

Ausencia de Garantías Judiciales y de Supervisión Independiente

La ley propuesta elimina los contrapesos institucionales esenciales en un Estado de derecho. La Corte Constitucional ha reiterado que el reconocimiento de un Conflicto Armado No Internacional es una cuestión de hecho, pero no por ello exenta de fiscalización ni de límites constitucionales. Este proyecto desconoce ese equilibrio y habilita un marco de acción punitivo con mínimos controles.

Militarización de la Vida Civil y Riesgo de Represión Masiva

La posibilidad de declarar objetivos militares a bienes inmuebles y personas por presunta conexión con economías criminales vulnera los principios de presunción de inocencia y debido proceso. La ciudadanía queda expuesta a un aparato de seguridad que actúa como juez, parte y ejecutor, lo cual configura un escenario de represión institucionalizada que carece de independencia.

Llamado Urgente a la Comunidad Internacional

Desde CODHAL hacemos un llamado a:

1. La Asamblea Nacional del Ecuador, a rechazar el proyecto de ley por su inconstitucionalidad manifiesta y su amenaza a los derechos humanos.
2. La Corte Constitucional, a realizar un control preventivo y sustantivo del contenido de la ley, conforme al principio pro persona y al bloque de constitucionalidad.
3. La comunidad internacional, a vigilar atentamente los efectos de esta iniciativa legislativa y sus impactos en la vigencia de los derechos fundamentales en Ecuador.
4. Las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana e internacional, a articularse para frenar el avance de este modelo de militarización autoritaria, que se camufla bajo un discurso de seguridad y lucha contra el crimen.

La seguridad no puede construirse sobre la base de la suspensión permanente de los derechos y de la consolidación de un Estado militar.